

C.A. de Santiago

Santiago, treinta y uno de enero de dos mil veinticinco.

Visto:

En estos autos Rol N° 7219-2024, Rit N° 202-2024, Ruc N° 2300562135-6, el Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, por sentencia de seis de diciembre de dos mil veinticuatro, decidió condenar, entre otros, a Edgar Gil como autor del delito consumado de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, descrito y sancionado en los artículos 1 y 3 de la Ley N° 20.000, en relación al artículo 19 letra a) del mismo cuerpo legal, a la pena de siete años de presidio mayor en su grado mínimo, por los hechos ocurridos en esta jurisdicción desde el mes de febrero de 2023 y hasta el 24 de mayo del mismo año, en la comuna de Pudahuel. Se lo sancionó, además, al pago de una multa ascendente a 10 (diez) unidades tributarias mensuales, pagaderas en cinco cuotas mensuales y sucesivas contadas desde que la sentencia se encuentre firme y ejecutoriada. En caso de incumplimiento se hará aplicación del artículo 49 del Código Penal, sin perjuicio de los abonos que pueda considerar el juez de garantía pertinente. Se lo condenó, también, a las penas accesorias establecidas en el artículo 28 del Código Penal, esto es, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena. Por último, se ordenó el comiso de todas las especies incautadas y su correspondiente destrucción, así como la determinación de la huella genética por el Servicio Médico Legal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley N° 19.970.

En contra de esta decisión, la defensa penal pública dedujo recurso de nulidad por la causal prevista en la letra b) del artículo 373 del Código Procesal Penal en relación con los artículos 19 letra a) de la Ley N° 20.000, y 69 del Código Penal.

Considerando:



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MFXNXSZYTPN

Primero: Que, en primer término, se alegó la errónea aplicación del artículo 19 letra a) de la Ley N° 20.000, al calificar erróneamente los hechos que se tuvieron por acreditados por el tribunal de base.

Señala que la configuración de la circunstancia agravante consagrada en la norma en comento no sólo exige un concierto o acuerdo de voluntades o división de roles -propios de una coparticipación- sino que un plus que está dado por el sentido de pertenencia al grupo que, si bien no presenta una estructura permanente, funciona materialmente como tal, aunque no llegue a constituir una asociación ilícita para traficar.

Indica que de acuerdo a la interpretación que han efectuado los tribunales superiores de justicia y la doctrina nacional, los elementos que componen la agravante en estudio son: -agrupación o reunión de delincuentes; -permanencia; y -organización.

Además, agrega, se ha señalado que la agrupación o reunión debe tener un plus en la puesta en peligro o lesión del bien jurídico protegido, esto es, no basta con que exista un fin común y permanencia en el tiempo, sino que se ha exigido que la acción desarrollada produzca una mayor afectación.

Afirma que frente al problema de prueba que exige la asociación ilícita en los delitos de tráfico ilícito de drogas, la ley *“optó por no modificar los fundamentos ni las exigencias, interpretativamente señaladas, del delito en sí, y se dio por satisfecho creando una circunstancia agravante ... que va a responder a la misma lógica, pero, sin el mismo nivel de exigencias, por lo que la agrupación o reunión de delincuentes representaría una forma simplificada de asociación ilícita”*.

Precisa que si bien el tribunal reconoce la necesidad de que se deben sostener las conductas en el tiempo, *“mal entiende aquel elemento, al equiparar la “permanencia” al conocimiento previo de los sujetos, sin que necesariamente se trate de permanencia para delinquir”*. En este sentido, explica, la magistratura afirmó que el condenado era parte de la organización de forma sostenida en el tiempo porque en su declaración indicó que conocía al padre de la señora Jaña -otra condenada- con quien había hecho negocios.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MFXNXSZYTPN

Agrega que la permanencia no sólo se debe extender en el tiempo, sino que también requiere que *“esté encaminada a un número indeterminado de ilícitos, en el sentido que el grupo de personas que constituye la agrupación o reunión debe estar establecida, no para la realización de una actividad ilícita en forma accidental, sino que, debe perseguir un fin común, esto es, un tráfico de sustancias estupefacientes de una manera prolongada en el tiempo”*.

Asegura que no se describe en los hechos establecidos ninguna circunstancia que pueda llevar a entender que se enmarcan en la figura del artículo 19 letra a) de la Ley N° 20.000, toda vez que las coordinaciones que se precisan dicen relación con la operación que se concretó los días 23 y 24 de mayo, coordinaciones que constituyen la preparación para la comisión del ilícito pero que en ningún caso permite sostener la existencia de una operación permanente en el tiempo.

Sostiene que lo decidido infringe el principio de *non bis in ídem* ya que el inciso 2° del artículo 63 del Código Penal previene que aquellas circunstancias inherentes a la comisión del delito no pueden ser nuevamente valoradas, por lo tanto, no se puede sostener que hay agrupación de delincuentes cuando sólo se está frente a la concurrencia de distintos agentes en la cadena de distribución.

Agrega que en la conducta fáctica que se tuvo por establecida no se describió *“un hecho de tráfico anterior ni ninguna acción tendiente a cometer de manera permanente el ilícito, más bien señala el tribunal que estas personas habrían estado coordinando tiempo previo a esta operación que termina finalmente materializándose el día 24 de mayo, es decir, hecho único”*.

Segundo: Que en cuanto a la errónea aplicación del artículo 69 del Código Penal denuncia la transgresión de los principios de igualdad, proporcionalidad y el *non bis in ídem*, ya que pese a haberse reconocido la concurrencia de dos circunstancias atenuantes, para los efectos de determinar la sanción a aplicar la magistratura señaló que debía considerarse la naturaleza de la droga y su cantidad, lo que, además vulnera el principio de *non bis in ídem*, ya que tales cuestiones ya fueron contempladas al tener por establecido el ilícito.



Tercero: Que termina solicitando que se acoja el recurso, se anule la sentencia y en el mismo acto se dicte una de reemplazo que condene al recurrente a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, en el caso que se estime una errónea interpretación de los artículos 19 letra a) de la Ley N° 20.000 y 69 del Código Penal; de cuatro años de presidio menor en su grado máximo, si solo se considera infracción de la primera norma; y de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, si sólo se concluye transgresión al último artículo, otorgándose el beneficio de la libertad vigilada intensiva en los dos primeros casos.

Cuarto: Que, en primer lugar, es necesario tener en consideración que el recurso de nulidad es de derecho estricto y procede en virtud de las causales y los fines establecidos en forma expresa por la ley, por ende, no conforma una instancia diversa que permita revisar los hechos que se han dado por establecidos en el juicio.

El recurso de nulidad, requiere, además, claridad y precisión en su fundamentación y peticiones, lo que resulta necesario toda vez que aquello da y define la competencia del tribunal superior que no puede acogerlo por otros motivos, salvo la situación contemplada en el inciso final del artículo 379 del Código Procesal Penal.

Quinto: Que la causal que se invoca en este recurso, esto es, la letra b) del artículo 373 del Código Procesal Penal, señala que procederá la declaración de nulidad del juicio oral y del fallo *“cuando, en el pronunciamiento de la sentencia, se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo”*.

La mentada causal resulta procedente en el evento que el fallo aplique incorrectamente el derecho llamado a regir la cuestión que motiva la controversia, lo que puede tener lugar en los casos de contravención formal de la ley -aquellos en que la sentencia prescinde de la ley o falla en oposición a su texto expreso-; en los de errónea interpretación de la ley -cuando la sentencia da al precepto legal un sentido o alcance distinto a aquel que debió haberle dado si hubiera aplicado correctamente las normas de interpretación; y si existiere una



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MFXNXSZYTPN

falsa aplicación de la ley -defecto que puede producirse cuando la ley se aplica a un caso no regulado por la norma o la sentencia prescinde de la aplicación de la ley para los casos en que ella se ha dictado.

Sexto: Que, asimismo, hay tener en cuenta que corresponde exclusivamente al tribunal de la instancia la ponderación de la prueba ofrecida y rendida, sin que tal proceso admita control por la vía recursiva, salvo por los motivos expresamente consagrados en los artículos 373 y 374 del Código Procesal Penal, puesto que en tal actividad ejercida discrecionalmente es soberano. De esta manera, esta Corte carece de facultades para rectificar o introducir modificaciones al establecimiento de las situaciones fácticas que se hayan tenido por acreditadas en el juicio, con la salvedad que en la determinación de tales supuestos se hayan desatendido los elementos que las causales citadas ordenan considerar.

Así, el recurso de nulidad tiene como finalidad verificar la correcta aplicación de las normas legales, de manera que una vez establecidos los hechos y analizados los antecedentes de la causa, la calificación jurídica resulte correcta y la pena a aplicar sea la que corresponde al ilícito investigado.

Séptimo: Que para los efectos de resolver la magistratura tuvo por establecido lo siguiente *“Desde fecha indeterminada, pero a lo menos desde el mes de febrero del año 2023 y hasta el día de sus detenciones ocurridas el 24 de mayo del año 2023, la acusada Paula Andrea JAÑA ARAVENA, reclusa en un centro penitenciario instruyó a sus hijas Krishna Anaïs CARREÑO JAÑA, Alejandra Andrea CARREÑO JAÑA, para contactarse y recibir en el domicilio de Krishna, al ciudadano boliviano EDGAR GIL, quien transportaba en su cuerpo desde el exterior del país ovoides de “cera” cocaína de alta pureza. La acusada Jaña Aravena con el fin de concreta el traslado de este extranjero se contactó en un sujeto de nombre Néstor quien en cumplimiento de su labor transportó al imputado Sr. Gil al domicilio de acopio. Por su parte la mujer de nombre Maritza Cañete, se ocupaba de la venta de pasta base de cocaína mientras convivía en su domicilio a dos de las hijas de Paola Jaña, de nombre Millaray y Alejandra, participando esta última en la adquisición de insumos*



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MFXNXSZYTPN

necesarios para el abultamiento de la droga que les entregó Edgar Gil, llevaba registro de notas de compradores según dinero y apodos. Estas coordinaciones se materializaron el día 24 de mayo del año 2023 siendo las 11:07, cuando en virtud de una autorización judicial de entrada y registro que ejecutó la Brigada Antinarcóticos Metropolitana se ingresó al domicilio ubicado en Oscar Castro N° 3181 de la comuna de Pudahuel, domicilio de la acusada Krisna Anaís CARREÑO JAÑA, presente en dicho lugar y momento junto al acusado de nacionalidad boliviana identificado como Edgar Gil, encontrando a la revisión del domicilio lo siguiente: - 172 envoltorios de papel cuadriculado, contenedores de cocaína base con un peso bruto de 33 gramos. - Tres baldes contenedores de cocaína base diluida en un medio acuoso con un peso bruto de 59 kilos, 453 gramos. Además de elementos propios para el abultamiento de la droga, como ácido muriático y soda caustica. De forma simultánea siendo las 11:00 horas, se materializó la orden de entrada y registro en el inmueble ubicado en Pasaje dos N° 9606, comuna de Pudahuel, domicilio en que pernoctaba Maritza Cañete junto a la hija de Paula Jaña de nombre Alejandra. La primera previo al ingreso policial y advirtiéndole su presencia, salió del inmueble dejando abandonado con el motor encendido el vehículo que conducía marca Geely, PPU SPPF.31, dejando en su interior documentación identificadora, tarjetas bancarias, teléfono celular y la suma de 1 millón 110 mil pesos en monedas. Producto del ingreso a este inmueble perteneciente a Maritza Antonieta CAÑETE SUDY se encontró lo siguiente: Un guante con la leyenda Absolute Zero Andes Ice Pro, que mantenía (75) setenta y cinco papelinillas contenedoras de cocaína con un peso bruto de 20 gramos y una agenda con anotaciones. En la habitación de Alejandra Carreño Jaña se levantó como evidencia \$116.000 (ciento dieciséis mil pesos) y una agenda con registros de pago y deudas dinero junto a diversos apodos”.

La magistratura determinó que los hechos descritos constituían, para todos los acusados, el delito de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, previsto y sancionado en los artículos 1 y 3 de la Ley N° 20.000, conducta que se agrava al estar comprendida



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MFXNXSZYTPN

en el artículo 19 letra a) del mismo cuerpo legal, en grado de desarrollo consumado según lo dispone el artículo 18 de la mencionada ley y en calidad de autores según lo dispuesto en el artículo 15 N° 1 del Código Penal.

Octavo: Que lo discutido por la parte recurrente, en primer término, se refiere a la configuración de la circunstancia agravante prevista en el artículo 19 letra a) del Código Penal, que establece *“Tratándose de los delitos anteriormente descritos, la pena deberá ser aumentada en un grado si concurre alguna de las circunstancias siguientes: a) Si el imputado formó parte de una agrupación o reunión de delincuentes, sin incurrir en el delito de organización del artículo 16”*. Por su parte, el artículo 16 dispone que *“Los que se asociaren u organizaren con el objeto de cometer alguno de los delitos contemplados en esta ley serán sancionados, por este solo hecho, según las normas que siguen (...)”*.

Noveno: Que al respecto cabe tener presente que las alegaciones de la parte recurrente parecieran hacer entender que la sentencia no razonó sobre la existencia de la agravante del artículo 19 letra a) de la Ley N° 20.000, bastándole el establecimiento de los hechos punibles para tenerla por acreditada.

Se observa del fallo en cuestión que la conducta fáctica acreditada por la que fueron sancionados los acusados, está explicitada en el fallo que se revisa, mientras los razonamientos en torno a la configuración de la agravante por la cual se reclama, se encuentran contenidos en el considerando séptimo, el que expresa distintos análisis en torno a presupuestos fácticos acreditados, que no forman parte, propiamente, del hecho típico del tráfico ilícito.

Así se da cuenta por la magistratura de las conexiones existentes entre los diversos acusados, con el objeto de acreditar la existencia de una cierta estructura organizacional, elemento que no es presupuesto fáctico necesario del delito de tráfico ilícito de estupefacientes. Se hace alusión a la permanencia de dichas conexiones y la distribución de funciones de cada uno de los acusados, se hace referencia a una cierta estructura en esta



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MFXNXSZYTPN

organización, todos estos elementos que no necesariamente concurren en el delito de tráfico de drogas.

Es así como se menciona cuál era el propósito que los unía, que no era otro que la perpetración de tráfico de drogas, que actuaban coordinadamente, desarrollando sus componentes diversas funciones, con rutas determinadas para la comercialización, atribuyendo específicamente al acusado el traslado de la droga y su contacto previo para tales efectos.

Décimo: Que, sin perjuicio de lo señalado en el motivo anterior, ha de tenerse en consideración que la causal de la letra b) del artículo 373 del Código Procesal Penal supone, sin lugar a dudas, que la parte recurrente acepta los hechos tal y como han sido fijados en el fallo, y por lo tanto los que el tribunal tuvo por acreditados resultan inamovibles.

El reproche del recurrente de nulidad, por consiguiente, debe entenderse dirigido únicamente al eventual error que observe en la interpretación y aplicación del derecho llamado a regir ese hecho ya intangiblemente determinado, tal y como ocurre en la especie.

En este sentido, la magistratura tuvo por establecida la existencia de una serie de hechos que configuran la figura prevista en la letra a) del artículo 19 de la Ley N° 20.000.

Es así como en el considerando séptimo, sobre la base de las declaraciones de los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, tiene por establecido que ellas *“denotan la cronología de un procedimiento bajo la ley 20.000, que comienza con escuchas telefónicas en las cuales la principal participante era -Paola Jaña- quien desde la cárcel coordinó sin objeción de sus hijas Krishna y Alejandra, las funciones que estas debían realizar en el medio libre, para poder concretar la entrega y preparación-abultamiento-de la sustancia de alta pureza denominada “cera” en una mayor cantidad de pasta base de cocaína”,* agregando que *“Estas actividades se relacionaron con los previos contactos con el sujeto extranjero, Edgar Gil, el sustento de su alojamiento y su traslado por un auto contratado y luego por Néstor pareja de Paola, también cumpliendo las instrucciones de esta hasta el punto de acopio y abultamiento, en el*



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MFXNXSZYTPN

domicilio de Krishna lugar donde esta y el Sr. Gil se encontraban presentes”, concluyendo que “Los innumerables otros medios de prueba, tales como los audios, prueba material y set fotográfico ilustraron las declaraciones de cada uno de los testimonios, quienes detallaron y dieron contexto a cada uno de estos, influyendo en la conclusión del tribunal, esto es que la mujer Paula Jaña contactó previamente con el Sr, Gil a quien conocía por los contactos con su padre fallecido, para su ingreso al país, según se desprende de estos audios en unión con la propia declaración de Sr, Gil quien afirmó conocerla gracias al padre y haberla contactado libremente al lugar donde esta estaba recluida”.

Por otra parte, en cuanto a la vinculación coordinada de los acusados, en el mismo fundamento la magistratura dejó constancia que *“La probanza expuesta fue irrefutable y debeladora del sorprendente y reiterado contacto de la interna Paola Jaña desde un centro penitenciario, en el cual se estima existe un control riguroso de estas comunicaciones, con sus hijas, con su pareja Néstor y con el acusado Edgar. Esto no solo se desprende de las escuchas telefónicas, sino porque en el medio libre las hijas realizaron las acciones encomendadas, necesarias para el recibimiento y abultamiento de la droga, encargándose Alejandra Guerrero-hija-incluso de la adquisición de los insumos para ello, como bicarbonato sino también porque la prueba analizada y en la misma declaración del acusado Sr. Gil, se indicó que este conocía a el padre de la señora Jaña con quien hacía negocios. Por lo tanto, dicho conocimiento de esta familia Carreño Jaña y de esta con aquel resultó acreditada suficientemente”,* agregando que *“de dichos audios se evidencia la relación emocional con el sujeto de nombre Néstor, y las peticiones a este para el traslado del extranjero, por lo tanto su intervención y relación con la Sra. Jaña también resultó evidente”.*

Undécimo: Que en cuanto a la errónea aplicación del derecho alegada por el recurrente esta Corte coincide con la reflexión que el tribunal del grado hizo al respecto, esto es, *“se puede sostener que para que exista este tipo de asociación ilícita de la ley de drogas se hace necesaria la existencia de diversos requisitos, tales como la*



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MFXNXSZYTPN

presencia de un grupo de personas con organización y jerarquía, una división de funciones permanencia en el tiempo y un objetivo determinado elementos que deben ser probados particularmente. A diferencia de la agravante materia de este juicio la asociación ilícita de drogas intensifica estos requisitos de manera tal que el legislador estableció diferentes penalidades respecto de quienes cumplan roles determinados como el mando, dirección, planificación o financiamiento, elevando sus sanciones”, concluyendo que “las conductas de este grupo de sujetos, desde Paola Jaña coordinadora desde la cárcel, recibimiento del imputado Sr. Gil en la ciudad de Santiago portando “cera” y el acopio de la misma en casa de Krishna al que concurría este, junto al hallazgo de la preparación de abultamiento, colaborando Alejandra con el bicarbonato, a juicio del tribunal no alcanzaron una mayor densidad organizativa, pero sus concatenados actos permitieron la consumación del delito y el cumplimiento del principal de los objetivos, que era la posesión y abultamiento de la droga en proceso de término para su tráfico, del cual se logró acreditar era promovido y monitoreado por Alejandra y Maritza desde el segundo de los domicilios, actuando con dolo directo”, concluyendo que “Dicha operación lógicamente requirió tiempo, esfuerzos y organización y distribución de funciones ya explicadas, pero no en la intensidad requerida por la organización ilícita criminal, en los términos e asociación que describe el artículo 16 del Código Penal”.

Duodécimo: Que el concepto de “agrupación” contemplado en el artículo 19 letra a) de la Ley N° 20.000, debe ser por el tribunal que, en este caso, le dio contenido, fundado en la observación y análisis de la prueba rendida, concluyendo adecuadamente que se configuró una organización de delincuentes en los términos de agravante concomitante, por cuanto los actos desplegados por ellos en armonía y metodología fueron indispensables para el logro del único propósito común de lograr una determinada cantidad de droga para comercializar. Es por ello que no pueden ser considerados de manera aislada y disociada, sino que de manera conjunta en el logro de este fin.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MFXNXSZYTPN

Se debe tener en consideración que lo que se busca con esta agravante es sancionar más severamente una serie de casos en que el nivel de coordinación entre los delincuentes excede la simple coparticipación, pero que ciertamente no constituyen la figura del artículo 16 de la Ley N° 20.000.

Decimotercero: Que, así las cosas, la existencia de una organización resultó correctamente explicada por parte del tribunal, pareciendo que el recurrente pretende por esta causal de nulidad revisar nuevamente los hechos asentados en el juicio, cuestión que le está vedada a esta Corte. Así, en definitiva, el recurso se sustenta en modificar las conclusiones fácticas de la magistratura, lo que resulta incompatible con la causal esgrimida.

Decimocuarto: Que en razón de lo expuesto y por no configurarse los presupuestos de la causal de nulidad invocada por el impugnante, el recurso deducido por la defensa del sentenciado deberá ser declarado sin lugar al no constatarse el error de derecho denunciado.

Decimoquinto: Que en cuanto a la errónea aplicación del artículo 69 del Código Penal, el tribunal indicó que *“Concurriendo en la especie dos atenuantes de responsabilidad penal -11 N°s 6 y 9- y de conformidad al artículo 68 del Código Penal, la sanción a aplicar en concreto luego de la agravación de esta por el reconocimiento del agravante concomitante al hecho punible se ubica en presidio mayor en su grado mínimo al rebajar según consideración del tribunal en un grado la penalidad”*, agregando que *“En cuanto a la extensión del daño causado y sin perjuicio del artículo 18 de la ley 20. 000 la droga en su mayoría no alcanzó a ser comercializada por lo que en concreto no se causó efectivamente el daño a la salud pública, ponderado ello con la naturaleza de la droga, esto es, pasta base de cocaína y su cantidad, serán elementos que se considerarán al momento de regular la pena dentro del grado correspondiente”*.

Decimosexto: Que, en lo pertinente, el artículo 68 del Código Penal dispone que *“Si son dos o más las circunstancias atenuantes y no hay ninguna agravante, el tribunal podrá imponer la pena inferior*



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MFXNXSZYTPN

en uno, dos o tres grados al mínimo de los señalados por la ley, según sea el número y entidad de dichas circunstancias”. Por su parte, el artículo 69 del mismo cuerpo legal establece que “Dentro de los límites de cada grado el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes y a la mayor o menor extensión del mal producido por el delito, teniendo en especial consideración la circunstancia de ser la víctima un menor de 18 años, un adulto mayor, según lo dispuesto por la ley N° 19.828, o una persona con discapacidad en los términos de la ley N° 20.422”.

Decimoséptimo: Que la jurisprudencia mayoritaria considera que el artículo 69 del Código Penal contiene una regla de carácter general que los tribunales del fondo deben tener en cuenta, apreciando todos los antecedentes reunidos en el proceso, pero no es una norma que los obligue a aplicar la pena dentro de un grado y extensión determinados. En todo caso, el hecho que la norma en comento no establezca una pauta rígida para la cuantificación de la pena no implica que el tribunal esté eximido de fundamentar la medición realizada. Sólo una fundamentación preventiva impide la violación del *non bis in idem*, y, por lo tanto, es preciso demostrar que los fundamentos de la cuantificación obedecen a valoraciones de este tipo, con base en los antecedentes del proceso.

Decimoctavo: Que el recurso de nulidad por errónea aplicación del derecho, en la presente alegación, está centrado en la determinación de la pena, que es de aplicación discrecional, casuística y de exclusiva competencia de los tribunales del fondo -y no de esta Corte-, sobre la base de los hechos evidenciados y asentados directamente durante el juicio. En este caso, en la fijación de la pena exacta, la magistratura ha debido tener en consideración la misma especie del ilícito, así como la mayor o menor extensión del mal producido.

Del mérito de lo dicho y lo obrado en la sentencia que se revisa aparece que estas reglas de carácter general han sido respetadas por el tribunal del grado, quien adjudicó la extensión de la pena corporal



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MFXNXSZYTPN

con arreglo a los criterios estipulados en los artículos 68 y 69 del Código Penal.

En relación con el artículo 69 -motivo de reproche- como expresamente establece el Código respectivo, el tribunal se encuentra autorizado, dentro de los límites de cada grado, para determinar la cuantía de la pena en atención a la mayor o menor extensión del mal producido por el delito, como lo hizo por los fundamentos anteriormente consignados.

A mayor abundamiento, no se vislumbra que, como lo afirma el recurrente, la magistratura haya considerado la naturaleza de la droga para agravar la pena, sino no por el contrario, tuvo en consideración para fijarla que no alcanzó a ser comercializada, esto es, que la vulneración del bien jurídico protegido fue de menor entidad.

Decimonoveno: Que, en consecuencia, no existiendo una errónea aplicación ni interpretación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, consignando la sentencia recurrida las valoraciones en la cuantificación específica de la pena dentro de los parámetros legales ajustados al principio de proporcionalidad e intensidad del injusto, no cabe sino rechazar el recurso deducido también en este acápite.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos **372, 373 letra b) y 385** del Código Procesal Penal, **se rechaza** sin costas, **el recurso de nulidad** impetrado por la defensa penal pública en representación de Edgar Gil, contra la sentencia de seis de diciembre de dos mil veinticuatro, pronunciada por el Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, en los autos Rit N° 202-2024, Ruc N° 2300562135-6, la que, por ende, no es nula.

Regístrese, comuníquese a los intervinientes en la audiencia fijada y devuélvase.

Redacción del ministro Rodríguez Moreno.

Reforma Procesal Penal N° 7.219-2024



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MFXNXSZYTPN

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por el Ministro señor José Pablo Rodríguez Moreno, la Ministra señora Carolina Brengi Zunino y la Abogado Integrante señora Claudia Candiani Vidal. No firman los Ministros señores Rodríguez Moreno y Brengi Zunino, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse con feriado legal.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MFXNXSZYTPN

Proveído por la Presidenta de la Novena Sala de la C.A. de Santiago.

En Santiago, a treinta y uno de enero de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MFXNXSZYTPN